

REPÚBLICA DE COLOMBIA



SALA DE DECISIÓN LABORAL

AUDIENCIA DE TRÁMITE Y FALLO

El veintinueve (29) de abril de dos mil veintiuno (2021), la SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL del TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN se constituyó en audiencia, en el proceso ordinario laboral promovido por **SHIRLEY TATIANA ARBOLEDA** contra la **ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES COLMENA** y **SIRLEY MARILIA GONZÁLEZ ECHAVARRÍA** tramitado bajo el radicado No. 05001-31-05-022-2017-00157-01, con el fin de resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia de primera instancia.

Al proceso también fueron vinculados como intervinientes excluyentes, los menores de edad **JUAN PABLO y MATEO RESTREPO GONZÁLEZ**, y **SIRLEY MARILIA GONZÁLEZ ECHAVARRÍA**, la que además representa a **JUAN PABLO y MATEO** en calidad de madre de ellos.

El Magistrado del conocimiento, Dr. FRANCISCO ARANGO TORRES, declaró abierto el acto y previa deliberación sobre el asunto, la Sala adoptó el proyecto presentado por el ponente, el cual quedó concebido en los siguientes términos:

1. ANTECEDENTES

A través de la presente acción judicial, la actora **SHIRLEY TATIANA ARBOLEDA** pretende se condene a la **ARL COLMENA**, a reconocerle pensión de sobrevivientes con los intereses moratorios o en subsidio indexación, en calidad de compañera permanente del difunto **Willinton Restrepo Restrepo**.

Como fundamentos de hecho de su pretensión, afirma la actora, que su compañero permanente **Willinton Restrepo Restrepo** falleció el 17 de enero de 2014, con quien convivió desde el mes de noviembre de 2008 hasta su deceso y procrearon un hijo de nombre **GERÓNIMO RESTREPO ARBOLEDA**.

Afirma que con ocasión del fallecimiento del señor Willinton Restrepo Restrepo, en calidad de compañera permanente, solicitó a la demandada pensión de sobreviviente en nombre propio y en representación de su hijo.

Relata que, la ARL demandada mediante comunicado de 10 de junio de 2016 le niega la pensión por haber sido solicitada también por la señora SIRLEY MARILIA GONZÁLEZ ECHAVARRÍA, dejando en suspenso el 50% de la prestación económica y reconociendo el restante 50% a los hijos del causante JUAN PABLO, MATEO RESTREPO GONZALES y GERÓNIMO RESTREPO ARBOLEDA.

Afirma que el causante tuvo una relación con la señora SIRLEY MARILIA GONZÁLEZ ECHAVARRÍA, pero que finalizó en el año 2007.

2. DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA.

La oficina judicial de primera instancia despachó de manera desfavorable las pretensiones de la demanda, argumentando, que la demandante no logró acreditar la convivencia mínima con la causante requerida por la Ley para acceder a la pensión de sobrevivientes.

Concluye que tanto la demandante como la interviniente según las pruebas recaudas convivieron con el causante, pero en cuanto a la convivencia con Shirley Tatiana Arboleda, pudo haber iniciado a finales del año 2009 y hasta el fallecimiento, por un término de 4 años, mas no los 5 años aducidos en la demanda.

Adujo que el causante para septiembre 20 de 2010 no convivía con la señora Sirley Marilia, según acta de folios 153 de la comisaria de familia de la comuna 6 de Medellín y como se dijo en el interrogatorio de parte, la separación lo fue desde agosto de 2010 y la señora Sirley en los relatos de los hechos de la denuncia indicó que desde agosto de 2010 no convivía con el señor RESTREPO y por lo tanto pudo haber convivencia desde ese mes y año con Shirley por aproximadamente 3 años y 5 meses.

Luego la juez declaró que los hijos del causante, JUAN PABLO y MATEO RESTREPO GONZÁLEZ tienen derecho a la pensión en doble porcentaje al reconocido al no existir más beneficiarios. Además, señaló que COLMENA estaba facultada para dejar en suspenso la prestación pensional pues había controversia sobre los beneficiarios por lo que absolvió del pago de intereses moratorios y ordenó a la indexación de las condenas.

También adujo la juez, que no operaba la prescripción dada la condición de menores de edad de los hijos del causante y por cuanto COLMENA estaba facultada para suspender la prestación.

Finalmente la *a quo*, adicionó la sentencia indicando que del retroactivo pensional ordenado deberán hacerse los descuentos en salud.

3. DE LAS APELACIONES DE LAS PARTES

Los apoderados judiciales de las partes presentaron recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia así:

APELACIÓN DE LA DEMANDANTE.

Adujo que la edad que tenía la demandante al momento en que inicio la relación sentimental con el causante causó un rechazo por la familia y su expareja, lo que se infiere de las declaraciones.

Que debe tenerse en cuenta el conjunto de la prueba documental y testimonial, la que solicita se analice en su integralidad.

Que en relación con el testimonio rendido por la demandante Shirley Tatiana en lo referente al momento en que pudo iniciar la relación con el causante, indica que sería desde el año 2008 que empezó a convivir y como se demuestra con los documentos aportados por la interviniente había una ruptura de la relación sentimental entre Shirley y Willinton Restrepo, misma que inició con comentarios como ella lo manifestó y conocimiento de que él tenía una relación sentimental con Shirley Tatiana Arboleda, por lo que pide no se tenga como cuenta la fecha del 2010 que se empiezan los trámites ante el comisario de familia y un posible proceso de alimentos por familia porque no tiene fecha de presentación.

Que de la investigación administrativa y las declaraciones allí rendidas fueron unísonos los testigos al manifestar la fecha en que inició la relación sentimental entre Shirley y el causante, así lo dijo camilo ANDRÉS SOSA URREGO quien fue claro al afirmar que conoció al señor Willinton en el año 2007 y que posteriormente cuando ya tuvo una mayor cercanía pudo conocer la relación que él sostenía con Shirley a finales del año 2008, por lo que se advierte que efectivamente existió esa convivencia con anterioridad a los 5 años antes del fallecimiento.

Que el testimonio de Estefanía Mosquera Restrepo es esquivo y confuso, inicialmente dijo que incluso Sirley Marilia terminó la convivencia con el causante desde el año 2008 o 2009 cuando vivían en Pedregal lo que se compadece con lo dicho en la demanda y las declaraciones del proceso, los que dan credibilidad de la convivencia de la demandante con el causante en los 5 años anteriores a su fallecimiento.

Que solicita se modifique la decisión y se condene al pago de la pensión de sobrevivientes a favor de Shirley Tatiana Arboleda.

APELACIÓN DE LOS INTERVINIENTES JUAN PABLO y MATEO RESTREPO GONZÁLEZ.

El apoderado de los intervinientes aduce que presenta recurso frente al numeral tercero de la sentencia referida al pago de los intereses de mora que están regulados en el artículo 95 de la ley 1295 de 1994. Que en este caso si bien el despacho justificó el no reconocimiento de la pensión y la suspensión, es claro el despacho al desvirtuar cada uno de los testigos de la parte demandante de la que se puede esclarecer que no hay una convivencia como la exigida por la norma.

Que considera que Colmena faltó a sus deberes de ARL frente a la investigación administrativa que no habría dado lugar a este pleito judicial pues es claro que los únicos beneficiarios de la prestación son los hijos del causante.

Que también pone de presente que los testigos no fueron tachados de falsos, ni los documentos arrimados. El testigo Camilo fue contradictorio dentro de sus propias afirmaciones en las declaraciones extrajudicial, la de la investigación y las declaraciones del proceso, Por lo tanto, solicita se condene al pago de intereses moratorios.

APELACIÓN DE LA ARL COLMENA S.A.

Apela la decisión de primera instancia en cuando a que no declara probada la prescripción y aduce que ella no opera en el caso de los menores cuando no tienen representante legal que pueda solicitar los derechos que le competen y que en este caso si tenían representante legal que podía pedir la pensión a su favor, por lo que no es posible que ahora se aduzca una ineficiencia de la ARL cuando la representante de los menores se estaba endilgando una calidad de beneficiaria ahora no alegada.

4. DE LAS ALEGACIONES EN SEGUNDA INSTANCIA.

Corrido el traslado para alegar en esta instancia, el apoderado judicial de los intervinientes excluyentes presentó oportunamente escrito de alegaciones, argumentando resumidamente que solicita confirmar la sentencia de primera instancia, pues quedó plenamente acreditado en el proceso que la parte demandante no cumplió los requisitos para ser beneficiaria de la pensión de sobreviviente, toda vez que la convivencia con el fallecido casi que fue inexistente y la prueba testimonial lejos de afirmar la convivencia creó un manto de dudas no solo frente a los extremos, sino también duración, y vocación de permanencia.

Que la demandante no tenía ni idea de las visitas que el causante realizaba con sus hijos, tampoco tenía claro el proceso de alimentos que se adelantaba en su contra, era básicamente una persona ausente en el entorno familiar del señor Restrepo Restrepo, y como lo indicó el juez de primera instancia los testigos de la demandante NO resultan confiables, no tienen ningún tipo de conocimiento sobre las circunstancias de fallecimiento ni siquiera de una relación con la actora.

Que sumado a lo anterior, la actora ni siquiera contestó la demandante que presentó la interviniente y por tanto constituye una sanción en su contra, y reafirma lo aquí indicado.

DE LA SOLICITUD DE MODIFICAR LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

ARL COLMENA no cumplió con su carga como pagadora de pensiones, pues al no realizar una investigación rigurosa, como la hecha por el juez de primera instancia, habría hallado que la demandante NO es beneficiaria y por tanto realizado un reconocimiento pensional pleno y en derecho, circunstancia que llevan a que debe causarse los intereses moratorios máxime que los beneficiarios de esta prestación son menores de edad.

5. PROBLEMA JURÍDICO PARA RESOLVER.

El primer problema jurídico por resolver se circunscribe a establecer si la demandante probó en este proceso, cumplir con los requisitos legales para obtener el derecho a pensión de sobrevivientes por el deceso del causante WILLINTON RESTREPO RESTREPO. De no asistirle derecho a la demandante a la pensión, se establecerá si hay lugar a condenar a COLMENA S.A., al pago de intereses moratorios a favor de los

hijos del causante y además determinar si hay lugar a declarar la prescripción de mesadas pensionales.

Tramitado el proceso en legal forma, y por ser competente esta Corporación Judicial para conocer de la consulta de la sentencia, conforme a lo dispuesto en el Art. 10 de la Ley 1149 de 2007, se pasa a resolver, previas las siguientes,

6. CONSIDERACIONES:

Para resolver la apelación de la parte demandante, es necesario manifestar, primeramente, que como quiera que el causante falleció el 17 de enero de 2014 conforme se observa con la copia del registro civil de defunción obrante a folio 14 del cartulario, la normatividad a aplicar para resolver el caso, es la contenida en la Ley 776 de 2002 que remite a los Arts. 46 y 47 de la ley 100 de 1993 reformados por la Ley 797 de 2003 y que dispone en su art. 13, que, entre otros, tendrán derecho a la pensión de sobrevivientes, en forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, y que en caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, deberá acreditar haber convivido con el causante no menos de cinco (5) años en los últimos cinco años anteriores al deceso del causante y hasta la muerte de este.

Para efectos de establecer la convivencia de la demandante con el causante se practicó interrogatorio de parte a la actora, declaración que se encuentra grabada a partir de los 27:55 minutos y siguientes en el primer audio del disco compacto de folio 186, el cual contiene la audiencia de trámite y juzgamiento en primera instancia. En el interrogatorio la demandante SHIRLEY TATIANA ARBOLEDA ORTIZ manifiesta que inició una convivencia con el causante desde el año 2008, luego afirma que inició cuando ella tenía 16 años e inmediatamente asegura que esa convivencia comenzó cuando tenía 15 años y medio.

Estas aseveraciones de la demandante resultan contradictorias y poco creíbles pues según el registro civil de nacimiento de folio 18, nació el 25 de febrero de 1994, de lo que se colige que cumplió 16 años el 25 de febrero de 2010. Ahora, en caso de considerar, como lo afirmó en el interrogatorio de parte, que inició su relación con el causante cuando tenía 15 años y medio, se entendería que inicia el 25 de agosto de 2009 y no en el año 2008 como lo aseguró.

Por su parte, el testigo **CAMILO ANDRÉS OSSA URREGO** en su declaración afirmó que conoció al causante porque trabajó con un amigo suyo de nombre ANTONIO VALENCIA, él le maneja el carro. Luego se volvieron amigos, aproximadamente en el año 2007. Afirma que en el 2009 el causante dejó de trabajar para ANTONIO y trabajó para él en una empresa de construcción hasta que falleció. Dice que cuando conoció al señor Willinton estaba con Shirley Tatiana Arboleda, vivían en Belén, por Santa Lucia, La Floresta y luego en Robledo.

Dice que conoció al causante en 2007 en una finca, él lo llevo a Medellín y le contó que tenía dos hijos, era separado y vivía con una persona. Afirma que desde diciembre de 2007 se veía con el causante una vez por semana y luego desde julio de 2008, que se quedó sin trabajo, le dio trabajo y continuaron teniendo mucho contacto.

Manifestó que tuvo conocimiento directo de la convivencia de Willinton con Shirley a mediados de 2008 que lo recogió en la casa para que lo acompañara a hacer una vuelta. Que no conoció que se separaran ni que el causante hubiere tenido otras parejas. Dice que muchas veces lo llamaba y era Shirley quien le contestaba.

Como se lee, el testigo afirma que percibió directamente la relación del causante con la señora Shirley Tatiana a mediados de 2008, pero lo dicho por el testigo se contradice con lo expuesto por la demandante en el interrogatorio de parte, pues si hubiese sido así, la relación de la pareja habría iniciado cuando Shirley tenía 14 años y ella es clara en el interrogatorio al exponer que en todo caso la relación inicio cuando tenía 15 años y medio.

Así las cosas, si se entendiera que la relación inicio cuando la demandante tenía 15 años y medio, ello sería en agosto de 2009 o si se tuviese que inicio cuando tenía 16 años, ello sería en febrero de 2010, y habiendo fallecido el señor WILLINTON RESTREPO RESTREPO el 17 de enero de 2014, en ninguno de los dos eventos se cumpliría con el tiempo mínimo de convivencia de 5 años en principio exigidos para acceder a la pensión de sobrevivientes pretendida.

Así pues, analizado el testimonio del señor a CAMILO ANDRÉS OSSA URREGO, considera la Sala que existen contradicciones entre su versión y las aseveraciones que hizo la demandante, por lo que su exposición, contrario a lo dicho por el recurrente, no es suficiente para considerar probado el tiempo de convivencia entre la demandante y el causante en el lapso exigido por la Ley, no solo por presentar iguales contradicciones que las de la demandante sino también por cuanto solo a partir de

2009 tuvo una relación laboral con el causante y pudo conocer otros aspectos de su vida privada. Adicional a lo anterior, los demás testigos arrimados al plenario, aun cuando manifiestan que la señora Shirley Tatiana vivía con el causante para el momento de su fallecimiento, ninguno establece que esa convivencia, como se aduce en la demanda, haya iniciado en el año 2008.

También aduce el recurrente que los documentos aportados por los intervinientes ad excludendum demuestran que se presentaba una ruptura de la relación que existió entre el causante y la señora Shirley Marilia, quien fuere su compañera tiempo atrás, lo cual resulta ser cierto, pero esos documentos a los que se refiere el apelante dan cuenta del rompimiento de la relación en el año 2010, como se lee en la denuncia penal de 17 de diciembre de 2011 de folios 161, en la que afirma que la mencionada relación había culminado un año y 3 meses antes de instaurarse.

En cuanto a la investigación administrativa adelantada por la ARL COLMENA y los testimonios allí vertidos(disco compacto de folio 57), tampoco prueban la convivencia de 5 años entre el causante y la demandante, pues aunque la señoras MARÍA EUGENIA RUIZ y KELLY JOHANA PIEDRAHITA ARBOLEDA afirman que la pareja estuvo haciendo vida marital por espacio de 5 años, también señalan que conocieron de esa convivencia en el barrio Robledo y según lo expuesto por la demandante vivió inicialmente con el señor RESTREPO RESTREPO en el barrio Belén por aproximadamente un año y en la Floresta por 2 años, es decir que esos supuestos 5 años no pudieron haberse desarrollado en el Barrio Robledo donde dicen las testigos percibieron esa relación, por lo tanto sus declaraciones, no prueban los cinco años de convivencia entre la actora y el causante, sino sólo dos años en el barrio Robledo, último lugar de residencia del causante y la demandante.

No obstante lo anterior, la Sala no puede perder de vista que recientemente la SCL de la Corte Suprema de Justicia efectuado un nuevo estudio del Art. 47 de la Ley 100 de 1993, reformado por la 13 de la Ley 797 de 2003, concluyo que los cinco años de convivencia que alude la citada norma es para el caso en que la pensión de sobrevivientes se cause por muerte del pensionado, pero que en el caso de los afiliados, solo se requiere que el momento de la muerte de este, exista núcleo familiar marital con vocación de permanencia.

Esto indicó la citada Corte en la Sentencia SL 1730 de 2020:

“Lo que discute en casación la censura, es la exégesis dada por el colegiado, al art. 47 de la Ley 100 de 1993 modificado por el art. 13 de la Ley 797 de 2003, respecto al número de años de convivencia exigidos a la compañera permanente de un afiliado al Sistema General de Pensiones, para establecer su calidad de beneficiaria de la pensión de sobrevivientes.

En relación con el objeto de la controversia, la doctrina reiterada de la Corte, entre otras, en las sentencias CSJ SL 32393, 20 may. 2008, CSJ SL 45600, 22 ag. 2012, CSJ SL793-2013, CSJ SL1402-2015, CSJ SL14068- 2016, CSJ SL347-2019, ha sido enfática en señalar, que la convivencia mínima requerida para ostentar la calidad de beneficiario de la pensión de sobrevivientes, tanto para cónyuge como para compañera o compañero permanente, es de cinco (5) años, independientemente de si el causante de la prestación es un afiliado o un pensionado.

Como consecuencia de la nueva integración de la Sala, se considera oportuno reevaluar la referida posición jurisprudencial, para sentar una nueva doctrina frente a la correcta interpretación de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que se armonice con los fines del Sistema Integral de Seguridad Social en general, y de la pensión de sobrevivientes en particular, así como con las razones que llevaron a establecer el requisito mínimo de convivencia allí previsto, y conforme a ellas, bajo qué presupuesto debía operar.

El Sistema de Seguridad Social Integral propende por la obtención de condiciones de vida dignas, mediante la protección de las contingencias que afectan a las personas y a la comunidad. En armonía con lo dispuesto en el art. 48 de la Constitución Política, la seguridad social es un servicio público obligatorio, que se presta en los términos y condiciones previstas en la ley, con sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad; de ella, hace parte el Sistema General de Pensiones, instituido con la finalidad específica de amparar de las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte.

Tal como lo recordó el Tribunal, para definir el contenido constitucional del derecho a la pensión de sobrevivientes, la Corte Constitucional ha desarrollado una serie de principios, condensados en la sentencia CC C-1035-2008, así:

1. Principio de estabilidad económica y social para los allegados del causante: Desde esta perspectiva, ha dicho la Corte que “la sustitución pensional responde a la necesidad de mantener para su beneficiario, al menos el mismo grado de seguridad social y económica con que contaba en vida del pensionado fallecido, que al desconocerse puede significar, en no pocos casos, reducirlo a una evidente desprotección y posiblemente a la miseria”

2. Principio de reciprocidad y solidaridad entre el causante y sus allegados: En el mismo sentido, la Corte ha concluido que la sustitución pensional busca impedir que sobrevinida la muerte de uno de los miembros de la pareja, el otro se vea obligado a soportar individualmente las cargas materiales y espirituales, por lo cual “el factor determinante para establecer qué persona tiene derecho a la sustitución pensional en casos de conflicto entre el cónyuge supérstite y la compañera o compañero permanente es el compromiso de apoyo afectivo y de comprensión mutua existente entre la pareja al momento de la muerte de uno de sus integrantes[”

3. Principio material para la definición del beneficiario: En la sentencia C-389 de 1996

“(…) la legislación colombiana acoge un criterio material -esto es la convivencia efectiva al momento de la muerte- como elemento central para determinar quien (sic) es el beneficiario de la sustitución pensional, por lo cual no resulta congruente con esa institución que quien haya procreado uno o más hijos con el pensionado pueda desplazar en el derecho a la sustitución pensional a quien efectivamente convivía con el fallecido”

Por otra parte, al analizar la constitucionalidad del aparte de la disposición que ocupa la atención de la Sala, en la sentencia CC C-1094-2003, la referida Corporación señaló:

2.3. Requisitos y beneficiarios de la pensión de sobrevivientes

Esta Corporación se ha pronunciado acerca de la finalidad y legitimidad de los requisitos de índole temporal o personal que señale el legislador para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes. Según lo expuesto en la sentencia C-1176 de 2001, es razonable suponer que las exigencias consignadas en los artículos demandados buscan la protección de los intereses de los miembros del grupo familiar del pensionado que fallece, ante la posible reclamación ilegítima de la pensión por parte de individuos que no tendrían derecho a recibirla con justicia. Igualmente suponer que el señalamiento de exigencias pretende favorecer económicamente a matrimonios y uniones permanentes de hecho que han demostrado un compromiso de vida real y con vocación de permanencia; también se ampara el patrimonio del pensionado, de eventuales maniobras fraudulentas realizadas por personas que sólo persiguen un beneficio económico con la sustitución pensional. Por esto, dijo la Corte, con el establecimiento de tales requisitos se busca desestimular la ejecución de conductas que pudieran dirigirse a obtener ese beneficio económico, de manera artificial e injustificada.

La jurisprudencia constitucional ha resaltado también que el artículo 48 de la Constitución otorga un amplio margen de decisión al legislador para configurar el régimen de la seguridad social.

En ejercicio de esta atribución y de acuerdo con las disposiciones demandadas, las cuales guardan una estrecha relación material entre sí, el legislador distingue entre requisitos exigidos en relación con las condiciones de causante al momento de su fallecimiento (art. 12) y calidades de los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes (art. 13).

[...]

2.5. Constitucionalidad del artículo 13 de la Ley 797

Los literales a) y b) del artículo 13 en referencia consagran las condiciones para que el cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite sea beneficiario de la pensión de sobrevivientes. De ellas, los accionantes impugnan tres aspectos en particular: i) el requisito de convivencia con el fallecido por no menos de 5 años continuos con anterioridad a su muerte; ii) el reconocimiento en forma vitalicia o en forma temporal del derecho a la pensión de sobrevivientes, en consideración a la edad del cónyuge o compañero supérstite; y iii) el reconocimiento en forma vitalicia o en forma temporal del derecho a la pensión de sobrevivientes, en consideración al hecho de haber tenido hijos o no con el causante.

Como se indicó, el legislador, de acuerdo con el ordenamiento constitucional, dispone de una amplia libertad de configuración frente a la pensión de sobrevivientes. Además, según lo tiene establecido esta Corporación, el señalamiento de exigencias de índole personal o temporal para que el cónyuge o compañero permanente del causante tengan acceso a la pensión de sobrevivientes “constituye una garantía de legitimidad y justicia en el otorgamiento de dicha prestación que favorece a los demás miembros del grupo familiar”.

En relación con los cargos formulados, la Corte encuentra que, en principio, la norma persigue una finalidad legítima al fijar requisitos a los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual no atenta contra los fines y principios del sistema. En primer lugar, el régimen de convivencia por 5 años sólo se fija para el caso de los pensionados y, como ya se indicó, con este tipo de disposiciones lo que se pretende es evitar las convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes.

Además, según el desarrollo de la institución dado por el Congreso de la República, la pensión de sobrevivientes es asignada, en las condiciones que fija la ley, a diferentes beneficiarios (hijos, padres y hermanos inválidos). Por ello, al establecer este tipo de exigencias frente a la duración de la convivencia, la norma protege a otros posibles beneficiarios de la pensión de sobrevivientes, lo cual está circunscrito dentro del ámbito de competencia del legislador al regular el derecho a la seguridad social. (Subraya y negrilla fuera de texto)

Para la Sala, dada la nueva revisión del alcance de la norma acusada, las anteriores consideraciones deben permanecer incólumes, ante lo expuesto por la misma Corte Constitucional en la sentencia CC C-336-2014, aducida por la censura, en la que tangencialmente equiparó el requisito de convivencia mínima, en el caso de afiliado y pensionado, y acto seguido citó la sentencia CC C-1176-2001 y la anteriormente referida, en cuanto al límite temporal exigido a los beneficiarios del *pensionado* y su legítimo fin; empero, el análisis de constitucionalidad efectuado se encontraba dirigido en esa oportunidad, a otros supuestos contenidos en la norma, esto es, el aparte final del último inciso del literal b) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, por lo que no tiene la virtualidad de modificar lo considerado en la sentencia CC C-1094-2003, además de no constituir el objeto de este recurso.

Y es que, de la redacción del precepto legal, se itera, el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100 de 1993, se advierte con suma claridad y contundencia que la exigencia de un tiempo mínimo de convivencia de 5 años allí contenida, se encuentra relacionada únicamente al caso en que la pensión de sobrevivientes se causa por muerte del pensionado; una intelección distinta, comporta la variación de su sentido y alcance, toda vez que, no puede desconocerse tal distinción, que fue expresamente prevista por el legislador en la norma acusada, así:

Son beneficiarios de la pensión de sobrevivientes:

a) En forma vitalicia, el cónyuge o la compañera o compañero permanente o supérstite, siempre y cuando dicho beneficiario, a la fecha del fallecimiento del causante, tenga 30 o más años de edad. En caso de que la pensión de sobrevivencia se cause por muerte del pensionado, el cónyuge o la compañera o compañero permanente supérstite, deberá acreditar que estuvo haciendo vida marital con el causante hasta su muerte y haya convivido con el fallecido no menos de cinco (5) años continuos con anterioridad a su muerte; (subraya y negrilla fuera de texto)

Adicionalmente, en la exposición de motivos de la Ley 797 de 2003, cuando se procedió a la sustentación de los preceptos del proyecto de ley, en lo concerniente al artículo 17 «BENEFICIARIOS DE LA PENSIÓN DE SOBREVIVIENTES», se precisó que “Se regulan los beneficiarios de la pensión de sobrevivientes estableciendo uniformidad entre los regímenes de prima media y de ahorro individual con solidaridad. **Adicionalmente se establece que el cónyuge o compañero permanente debe haber convivido con el pensionado por lo menos cuatro años antes de fallecimiento con el fin de evitar fraudes**” (subraya y negrilla fuera de texto).

Desde la expedición de la Ley 100 de 1993, ha sido clara la intención del legislador al establecer una diferenciación entre beneficiarios de la pensión de sobrevivientes por la muerte de **afiliados** al sistema no pensionados, y la de **pensionados**, esto es, la conocida

como sustitución pensional, previendo como requisito tan solo en este último caso, un tiempo mínimo de convivencia, procurando con ello evitar conductas fraudulentas, «convivencias de última hora con quien está a punto de fallecer y así acceder a la pensión de sobrevivientes», por la muerte de quien venía disfrutando de una pensión.

La evidente y contundente distinción efectuada por el legislador en el precepto que se analiza, comporta una legítima finalidad, que perfectamente se acompasa con la principal de la institución que regula, la protección del núcleo familiar del asegurado o asegurada que fallece, que puede verse afectado por la ausencia de la contribución económica que aquel o aquella proporcionaba, bajo el entendido de la ayuda y soporte mutuo que está presente en la familia, que ya sea constituida por vínculos naturales o jurídicos, que en todas sus modalidades se encuentra constitucionalmente protegida, como núcleo esencial de la sociedad (art. 42 CN).

En este punto resulta necesario precisar, que conforme al análisis hasta aquí efectuado, de lo dispuesto en el **literal a)** del art. 13 de la Ley 797 de 2003, para ser considerado beneficiario de la pensión de sobrevivientes, en condición de cónyuge o compañero o compañera permanente supérstite del afiliado al sistema que fallece, no es exigible ningún tiempo *mínimo* de convivencia, toda vez que con la simple acreditación de la calidad exigida, cónyuge o compañero (a), y la conformación del núcleo familiar, con vocación de permanencia, vigente para el momento de la muerte, se da cumplimiento al supuesto previsto en el *literal de la norma analizado*, que da lugar al reconocimiento de las prestaciones derivadas de la contingencia, esto es, la pensión de sobrevivientes, o en su caso, la indemnización sustitutiva de la misma o la devolución de saldos, de acuerdo al régimen de que se trate, y el cumplimiento de los requisitos para la causación de una u otra prestación.

Lo anterior comporta también que, contrario a lo considerado por el Tribunal, para efectos de la aplicación de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, no hay lugar a efectuar ninguna distinción entre beneficiarios de un mismo tipo de causante, para el caso un afiliado, esto es, según la forma en la que se constituya el núcleo familiar, si lo es por vínculos jurídicos o naturales, en tanto éste, es decir, el núcleo familiar, es lo que protege el Sistema General de Seguridad Social. Así lo recordó la Corte Constitucional, en el análisis de constitucionalidad efectuado al art. 163 de la Ley 100 de 1993, antes de ser modificado por el art. 218 de la Ley 1753 de 2015, en la sentencia CC C-521-2007, que en torno al concepto de familia y su protección sin discriminación, en consideraciones que se avienen al Sistema Pensional, precisó:

Además de ser denominada constitucionalmente como el núcleo fundamental de la sociedad (C.Po. art. 42), la familia ha sido definida por la Corte Constitucional como “Aquella comunidad de personas emparentadas entre sí por vínculos naturales o jurídicos, que funda su existencia en el amor, el respeto y la solidaridad, y que se caracteriza por la unidad de vida o de destino que liga íntimamente a sus miembros o integrantes más próximos”. De su parte, el artículo 5º. de la Carta Política establece que el Estado ampara a la familia como institución básica de la sociedad, mientras el inciso segundo del artículo 42 superior prevé que el Estado y la sociedad garantizan la protección integral de la familia.

La jurisprudencia ha señalado el marco constitucional de protección para la familia en los siguientes términos:

“(…) en nuestro país el régimen constitucional de la familia quedó definido: (i) en el artículo 5º de la Carta, que eleva a la categoría de principio fundamental del Estado la protección de la familia como institución básica de la sociedad; (ii) en el artículo 13, en cuanto dispone que todas las personas nacen libres e iguales y que el origen familiar no puede ser factor de discriminación; (iii) en el artículo 15, al reconocer el derecho de las personas a su intimidad familiar e imponerle al Estado el deber de respetarlo y hacerlo respetar; (iv) en el artículo 28, que garantiza el derecho de la familia a no ser

molestada, salvo que medie mandamiento escrito de autoridad competente con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley; (v) en el artículo 33, en cuanto consagra la garantía fundamental de la no incriminación familiar, al señalar que nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil; (vi) en el artículo 43, al imponerle al Estado la obligación de apoyar de manera especial a la mujer cabeza de familia; (vii) en el artículo 44, que eleva a la categoría de derecho fundamental de los niños el tener una familia y no ser separado de ella; y (viii) en el artículo 45, en la medida en que reconoce a los adolescentes el derecho a la protección y a la formación integral”

4. Competencia del legislador para regular el servicio de seguridad social

4.1. Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 48, 49, 53 y 150 de la Constitución Política, el Congreso de la República cuenta con atribuciones amplias para configurar el sistema normativo a partir del cual se presta el servicio público de seguridad social. Por tratarse de una actividad que implica atención para el bienestar de la comunidad en materia de salud, con eventuales contingencias para la vida de los asociados, el constituyente quiso que la relación entre las instituciones prestadoras del servicio y los usuarios del mismo, fuera gobernada mediante un sistema legal específico en el cual la voluntad de los contratantes juega un rol secundario frente a las decisiones del legislador, siempre y cuando éstas sean conformes con lo dispuesto en la Carta Política.

Además de servicio público, la seguridad social en salud es un derecho de carácter prestacional consagrado en el artículo 48 de la Constitución Política, concebido como mandato dirigido al Estado Social de Derecho, para ensamblar un sistema conformado por entidades y procedimientos encaminados a ofrecer una cobertura general ante las contingencias que puedan afectar la salud de las personas. Según el constituyente, este derecho ha de ser garantizado con sujeción a los principios de eficiencia, continuidad, universalidad, buena fe y solidaridad, para la prevención, promoción y protección de la salud y el mejoramiento de la calidad de vida de los asociados.

4.2. El marco jurídico diseñado por el constituyente permite al legislador configurar el sistema de seguridad social en salud, dentro de los límites propios del Estado Social de Derecho y de conformidad con los principios, derechos y garantías establecidos en la Constitución Política. Precisamente, el Estatuto Superior consagró una protección igual para las uniones familiares constituidas por vínculos naturales y jurídicos, como también para las conformadas por la decisión libre de contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformarla.

[...]

4.8. Para la Sala, la exigencia de convivir durante un lapso superior a dos años para lograr afiliarse como beneficiario del Plan Obligatorio de Salud al compañero (a) permanente, quebranta los derechos a la igualdad, seguridad social, salud, vida, libre desarrollo de la personalidad y protección integral de la familia, por cuanto el constituyente consagró una protección igual para las uniones familiares constituidas por vínculos naturales o jurídicos, como también para las conformadas por la decisión libre de contraer matrimonio o la voluntad responsable de conformarlas.

Desde una perspectiva constitucional no existe una justificación objetiva y razonable para otorgarle un trato distinto al cónyuge a quien no se le impone la obligación de cumplir un determinado período de convivencia con el afiliado, mientras que el compañero (a) no puede ser afiliado al POS si la unión permanente es inferior a dos años. Sobre esta materia es pertinente recordar el texto del artículo 42 de la Carta Política, según el cual:

[...]

4.10. La diferencia de trato entre el cónyuge del afiliado y el compañero (a) permanente del afiliado a quien se impone la obligación de convivir durante un período mínimo de dos años para acceder a las mismas prestaciones, no está justificada bajo parámetros objetivos y razonables, por cuanto se impone a éste último la carga de permanecer durante dos años sin los beneficios propios del Plan Obligatorio de Salud, brindándole como explicación que se trata de un lapso efímero durante el cual podría afiliarse como trabajador independiente al régimen contributivo o al régimen subsidiado, o acceder a los servicios en calidad de vinculado.

Similares consideraciones podrían hacerse respecto del cónyuge a quien la norma ampara como beneficiario a partir del matrimonio; sin embargo, la disposición, contrariando lo dispuesto en el artículo 13 superior, ordena darle al compañero (a) permanente un trato discriminatorio al imponerle una carga desproporcionada, en cuanto a pesar de estar conformando una familia lo obliga a permanecer durante dos años por fuera del ámbito de cobertura señalado en el artículo 163 de la ley 100 de 1993.

[...]

Mientras el artículo 2º. de la ley 54 de 1990 regula el régimen económico de las uniones maritales de hecho, el artículo 163 de la ley 100 de 1993 se aplica a la cobertura familiar en el Plan Obligatorio de Salud; es decir, una y otra disposición son ontológicamente diferentes, la primera aplicable a las consecuencias económicas derivadas de la unión marital de hecho, al paso que la segunda está relacionada con la protección integral de la familia en cuanto a la prestación del servicio de seguridad social en salud se refiere, materia ésta que vincula la protección eficaz de los derechos fundamentales a la vida en condiciones en dignas y a no ser discriminado en razón del origen familiar.

Por esta razón, desde una perspectiva constitucional el término de dos años previsto en el artículo 2º. de la ley 54 de 1990 y el de dos años establecido en el artículo 163 de la ley 100 de 1993, no pueden ser considerados como similares ni mucho menos homologables, pues uno y otro atienden a un origen y a unos propósitos sustancialmente distintos.

En cuanto a lo dispuesto en el art. 10 del Decreto 1889 de 1994, que prevé que se considera compañera o compañero permanente para efectos de la pensión de sobrevivientes causada por la muerte de un afiliado, la última persona que haya hecho vida marital con aquel durante un lapso no inferior a dos (2) años, otrora se consideró por la Sala había perdido fuerza con la entrada en vigencia de la Ley 797 de 2003, por ser de mayor jerarquía y prevalecer sobre el aludido decreto (CSJ SL1402-2015), y posteriormente, que no resultaba aplicable por cuanto reglamentó parcialmente la Ley 100 de 1993, en su versión primigenia, no así la Ley 797 de 2003 (CSJ SL347-2019). En esta oportunidad, recoge esta última tesis la Sala, para precisar que el Decreto 1889 de 1994 reglamentó parcialmente las normas del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones, por lo que cobijaba las modificaciones a las mismas, siempre que no resultara contrario a ellas.

Empero, como el decreto reglamentario no puede ir más allá de lo dispuesto en la ley, imponiendo requisitos que superen lo legalmente establecido, como lo hizo en su artículo 10, que no está por demás indicar fue subrogado por el artículo 2.2.8.2.3 del Decreto Único Reglamentario 1833 de 2016, se considera que, para determinar quién ostenta la calidad de compañero o compañera permanente de un afiliado, a efectos de lo dispuesto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, que modificó el art. 47 de la Ley 100 de

1993, debe acudir a la noción constitucional de familia, en la forma en la que ha sido ampliamente analizada por la Corte Constitucional, entre otras, en la providencia citada.

Con lo anterior, la Sala fija el verdadero alcance de la disposición acusada, a la luz del precepto constitucional de favorabilidad, *in dubio pro operario*, esto es, que la convivencia mínima de cinco (5) años, en el supuesto previsto en el literal a) del art. 13 de la Ley 797 de 2003, solo es exigible en caso de muerte del pensionado.

Por último, se precisa que, aunque aparentemente la diferenciación implícita en la disposición analizada surge discriminatoria, a la luz de lo dispuesto en el art. 13 de la CN ello no puede entenderse así, por cuanto la igualdad solo puede predicarse entre iguales, debiendo justamente establecerse para salvaguardar ese principio, la diferencia de trato entre desiguales.

En este caso, el elemento diferenciador lo constituye la condición en la que se encuentra el asegurado causante de la prestación, de un lado, el afiliado que está sufragando el seguro para cubrir los riesgos de invalidez, vejez y muerte, que no tiene un derecho pensional consolidado, pero se encuentra en construcción del mismo, y para dejar causada la pensión de sobrevivientes requiere el cumplimiento de una densidad mínima de cotizaciones prevista en la ley.

Por otra parte, el pensionado, que con un derecho consolidado, deja causada la prestación a los miembros de su núcleo familiar con el solo hecho de la muerte, circunstancia en la que adquiere relevancia la exigencia de un mínimo de tiempo de convivencia, se itera, para evitar fraudes al sistema pensional, proteger su núcleo familiar de reclamaciones artificiosas y contener conductas dirigidas a la obtención injustificada de beneficios económicos del Sistema, cuya sostenibilidad debe salvaguardarse de tales actuaciones, precisamente para que sea posible el cumplimiento de los fines para los cuales fue previsto.”

El anterior criterio sobre la que para ser beneficiario de la pensión de sobrevivientes en el caso del afiliado al sistema pensional, solo se requiere exista núcleo familiar marital con vocación de permanencia y vigente para el momento de la muerte., ha sido reiterado con posterioridad a la citada sentencia por la SCL de la CSJ en las Sentencias SL- 3626 de 2020, SL-3785 de 2020, SL-4008 de 2020.

En el caso de la accionante, como ya se explicó en precedencia, conforme los testimonios, no prueba que haya convivido cinco años con el causante, pero no queda duda alguna que convivieron maritalmente al menos dos años y hasta la muerte del causante.

Los testimonios se en reforzados con la prueba documental, como la certificación de folio 35 que el fallecido tenía a la demandante al sistema de salud como su beneficiaria desde el 15 de febrero de 2013.

Igualmente es muy dicente el documento folio 176, con stiker de radicación ante la Personería de Medellín, en el que la interviniente SIRLEY MARILIA GONZÁLES

ECHAVARRÍA, cita a la demandante a conciliación en procura de obtener unos bienes muebles en posesión de la actora y que a decir de la citada intervienen los consiguió mientras convivió con el causante, documento en el que se anota entre otros hechos el siguiente:

SEGUNDO: Al momento de fallecer el señor WILLINTON RESTREPO RESTREPO (enero 17 de 2014) llevaba conviviendo con la señora SIRLEY TATIANA ARBOLEDA ORTIZ, alrededor de dos años, quedando la señora SIRLEY TATIANA, con los bienes muebles conseguidos con nuestra relación de más de 14 años.

De esa manera, para esta Sala es claro que los medios de convicción analizados en conjunto dan cuenta de que el causante y la actora convivían maritalmente a la fecha del óbito de este, al menos con dos años antelación, por lo que, la sentencia apelada será revocada en cuanto absolvió a la ARL COLMENA S.A. de la pensión de sobrevivientes pretendida por la demandante, para en su lugar proferir condena al pago de la misma.

En este punto del fallo es necesario traer a colación, que a pesar que la demandante a la fecha que adquirir el derecho a la pensión de sobrevivientes no contaba con 30 años de edad, conforme la copia de su registro civil de nacimiento y de su cedula de ciudadanía que militan a folios 17 y 18 en los que consta que nació el 25 de febrero de 1994, la pensión que se le concede es vitalicia, conforme al Art. 47 de la Ley 100 de 1993, reformado por el Art. 13 de la Ley 797 de 2003, pues había procreado un hijo con el causante de nombre GERÓNIMO RESTREPO ARBOLEDA, conforme al registro civil de nacimiento de folio 30 del plenario.

En atención a lo anterior, se condenará a la ARL COLMENA S.A. a reconocer y pagar a la demandante SHIRLEY TATIANA ARBOLEDA pensión de sobrevivientes de origen profesional, a partir del 17 de enero de 2014, de forma vitalicia, en el monto de 50% del salario mínimo mensual legal hasta el momento que se le extinga a todos los hijos del causante el derecho a percibir la pensión que ya les fue otorgada, y una vez esto ocurra, se le pagar a la actora el 100% de la pensión.

En cuanto a los intereses moratorios pretendidos por la demandante, debe precisarse que no hay lugar a su imposición, pues respecto de las prestaciones del subsistema de riegos profesionales existe Ley especial, la 1562 de 2012, la que en el parágrafo 1 de su Art. 6 establece lo siguiente:

“Las sumas de dinero que las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales deben pagar por concepto de prestaciones económicas deben indexarse, con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) al momento del pago certificado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, DANE.”

Al existir norma especial que establece expresamente que las sumas de dinero que las Entidades Administradoras de Riesgos Laborales deben pagar por concepto de prestaciones económicas deben indexarse, no es aplicable la norma del Art. 141 de la Ley 100 de 1993, y por cuanto además, la Ley 1562 de 2012, es posterior y por ello respecto de las pensiones de riesgos profesionales, el Art. 141 de la Ley 100 de 1993 deben entenderse derogado o modificando.

Ahora, si en gracia a discusión, el Art. 141 de la Ley 100 de 1993, se encontrara vigente respecto las pensiones del sistema de riesgos profesionales, tampoco habría derecho a los intereses, pues la entidad de seguridad social se encontraba en la obligación legal de suspender el reconocimiento del 50% de la pensión de sobrevivientes por existir controversia entre posibles beneficiarios debiendo la justicia ordinaria laboral definirla, puesto que en tratándose de conflictos entre beneficiarios de la pensión, en aras de establecer a quién corresponde la prestación, la ARL debía suspender el reconocimiento del eventual derecho hasta tanto la jurisdicción ordinaria de seguridad social lo defina, conforme lo establece el Art. 6 de la Ley 1204 de 2008.

En ese sentido, la Corte Suprema de justicia, ha enseñado en sentencia SL, 14 agosto de 2007 rad. 28910, lo siguiente:

[...] si en caso de controversia entre beneficiarios el empleador no puede dirimir esa diferencia y por lo tanto está habilitado para abstenerse de efectuar algún pago mientras no exista una decisión judicial o un acuerdo entre las partes, es claro que si esa controversia ha sido llevada al conocimiento de la justicia para que la dirima, no puede considerarse que ese empleador ha incurrido en mora en el reconocimiento y pago del derecho debatido, pues no existe certeza jurídica acerca del verdadero titular, certeza que sólo puede otorgar con carácter vinculante el Juez.

En este mismo sentido en sentencia, CSJ SL18638-2016, se explicó:

[...] las mesadas a favor de la accionante serán objeto de indexación, en atención a que en este asunto no son procedentes los intereses de mora consagrados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, por cuanto, el Instituto de Seguros Sociales, al percatarse de la existencia de dos posibles beneficiarias de la pensión de sobrevivientes, esto es la demandante, en su condición de compañera permanente y la señora Piedad Elena Londoño Madrid como cónyuge supérstite, no accedió al pago de esa prestación a ninguna de las reclamantes, posición que encuentra sustento en el artículo 34 del Acuerdo 049 de 1990, aprobado por el Decreto 758 del mismo año.

Así las cosas, al existir controversia entre posibles beneficiarias de la pensión de sobrevivientes y estando legalmente avalada la ARL para suspender el trámite del reconocimiento de la pensión, no es posible considerar que incurrió en mora en el pago de mesadas pensionales, razón por la cual se negará la pretensión del reconocimiento de los intereses moratorios.

Respecto de la pretensión subsidiaria de la indexación, ella es procedente, conforme al mandato legal del parágrafo 1 de su Art. 6, de la Ley 1562 de 2012, por lo que las mesadas pensionales retroactivas que se condena a pagar a COLMENA S.A. deberán indexarse conforme la siguiente fórmula:

$$VA = Vh \times \frac{\text{índice final}}{\text{Índice inicial}}$$

En la que VA (valor actualizado) es igual a la mesada pensional dejada de percibir por la demandante (Vh), multiplicada por el guarismo que resulta al dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en el mes anterior al pago, por el índice inicial, vigente en el mes de causación de cada mesada.

Debe anotarse aquí, que al contestar la demanda, la apoderada de la sociedad accionada propuso la excepción de prescripción (fls. 54). No obstante dicho fenómeno jurídico no tiene operancia en el presente asunto dado que el derecho a la pensión se causó el 17 de enero de 2014, que fallece el causante y la reclamación de la prestación fue presentada por la demandante a la ARL demandada antes del 10 de junio del 2016, pues en esta fecha COLMENA S.A. le contesta a la demandante negándole la pensión (fl. 31-32) estando entonces interrumpida la prescripción hasta esta fecha y la demanda fue presentada el 10 de marzo de 2017, por lo que no alcanzaron a transcurrir los 3 años de prescripción consagrados en el Artículo 22 de la Ley 1562 de 2012 aplicable al caso, en concordancia con el art. 489 del CST.

Conforme las consideraciones, fácticas probatorias y de derecho expuestas en precedencia, la sentencia apelada será revocada, para en su lugar, condenar a la ARL COLMENA S.A. a reconocer y pagar a la demandante SHIRLEY TATIANA ARBOLEDA pensión de sobrevivientes de origen profesional, en los términos expuestos en precedencia, y en consecuencia, por sustracción de materia no es necesario resolver la apelación de ninguna de las demás partes e intervinientes en el proceso.

Sin Costas en ninguna de las instancias, por cuanto el litigio que aquí se decide, no lo generó la ARL demandada, sino que es por mandato legal, que la justicia debía decidir ante la controversia entre beneficiarios de la pensión.

7. DECISIÓN

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR íntegramente la sentencia del 13 de marzo de 2019 proferida por el **JUZGADO VEINTIDÓS LABORAL DEL CIRCUITO DE MEDELLÍN**, en el proceso ordinario laboral de primera instancia promovido por **SHIRLEY TATIANA ARBOLEDA** contra la **ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES COLMENA S.A.** y los menores de edad **JUAN PABLO y MATEO RESTREPO GONZÁLEZ**, representados por su madre **SIRLEY MARILIA GONZÁLEZ ECHAVARRÍA**, para en su lugar:

CONDENAR a la **ARL COLMENA S.A.** a reconocer y pagar a la demandante **SHIRLEY TATIANA ARBOLEDA** pensión de sobrevivientes de origen profesional, a partir del 17 de enero de 2014, de forma vitalicia, en el monto de 50% del salario mínimo mensual legal hasta el momento que se le extinga a todos los hijos del causante el derecho a percibir la pensión que ya les fue otorgada, y una vez esto ocurra, se le pagará a la actora el 100% de la pensión.

De cada mesada pensional, se descontará el aporte legal al sistema de seguridad social en salud, los que serán girados a la EPS a la que se encuentre afiliada la demandante, o a la que esta se afilie, en el caso que no esté afiliada.

En consonancia con lo anterior, se absuelve a la ARL COLMENA S.A. de las pretensiones de los intervinientes JUAN PABLO y MATEO RESTREPO GONZÁLEZ.

SEGUNDO: Sin costas en ninguna de las instancias.

La presente sentencia se notifica a las partes en ESTADOS.

Vuelva el expediente al juzgado de origen.

No siendo otro el objeto de esta diligencia se declara culminada, y se firma el acta por quienes intervinieron en la decisión, los Magistrados,

FRANCISCO ARANGO TORRES

JOHN JAIRO ACOSTA PÉREZ

JAIME ALBERTO ARISTIZÁBAL GÓMEZ

**EL SUSCRITO SECRETARIO DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE MEDELLÍN – SALA LABORAL -
HACE CONSTAR**

Que la presente providencia se notificó por estados
N ° **073** del **30 DE ABRIL DE 2021**.

consultable aquí:

<https://www.ramajudicial.gov.co/web/tribunal-superior-de-medellin-sala-laboral/125>

Firmado Por:

FRANCISCO ARANGO TORRES

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JAIME ALBERTO ARISTIZABAL GOMEZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

JOHN JAIRO ACOSTA PEREZ

MAGISTRADO

MAGISTRADO - TRIBUNAL SUPERIOR SALA LABORAL DE LA CIUDAD DE MEDELLIN-ANTIOQUIA

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **5f043e16c0151c2847f11c171d0ce2fbe3fb9303b0df4eb2d0a7b2c1ab2e2e53**

Documento generado en 29/04/2021 10:27:32 AM